

ENSAYOS

CRISIS ECONOMICA Y EL DETERIORO DE LA DOMINACION EN MEXICO

*Angélica Cuéllar
Antonio Rivera F.*

Introducción

Este ensayo pretende señalar algunas consideraciones y cuestionamientos alrededor de los procesos políticos económicos más recientes en la formación social mexicana.

La política estatal de 1970 a 1982 se ha movido en medio de una contradicción: medidas económicas para facilitar la acumulación de capital y la búsqueda del consenso en el conjunto de la sociedad a través de la aceptación de un **pacto social** entre las diferentes fuerzas sociales.

Ante la crisis, y como una alternativa económica y política de desarrollo, han surgido en los últimos años planteamientos y proposiciones alrededor de un proyecto nacionalista; este contempla a impulsar el desarrollo económico mediante el fortalecimiento del Estado como rector de la economía.

En dicho proceso, la participación de amplios sectores populares, principalmente obreros y campesinos, se presenta como condición que permitirá instrumentar el proyecto global. Así, a la vez que se plantea reactivar la economía en términos de redefinir un modelo de desarrollo y superar la crisis, los planteamientos generales estarían orientados a incrementar el consenso al propiciar la participación de sectores populares tanto en términos de un reparto más equitativo de la riqueza, como, en el ámbito político posibilitar mayor espacio para intervenir en la toma de decisiones. ¹

I

La crisis económica de los años recientes ha sido marco general sobre el cual se han definido distintos procesos políticos y económicos. En el desarrollo de estos procesos, la mediación de las fuerzas sociales y los conflictos resueltos en su interior, en algunos casos con el Estado, han marcado su límite.

A **grosso modo** estos procesos, se movieron en un espectro que va desde un supuesto neopopulismo hasta un antipopulismo feroz. El primero de ellos orquestado fundamentalmente para superar una crisis de legitimidad del gobierno dentro de nuevas necesidades de acumulación, y el segundo orientado a superar la crisis económica, tratando de armonizar una política económica restrictiva para el conjunto de los explotados, con tasas de crecimiento económico sostenido.

En un primer momento, tres son los elementos que precedieron tanto la política económica, como los procesos políticos de apertura y diálogo en el sexenio de Luis Echeverría.

El primero de ellos, fue el agotamiento del modelo de acumulación y la necesidad de plantear un nuevo modelo. El agotamiento del modelo del desarrollo estabilizador se manifestó en el comportamiento de los sectores productivos que disminuyeron sus tasas de crecimiento.

El sector agropecuario, desde finales de los años sesenta entró en franco estancamiento y dejó de cumplir su papel de suministrar alimentos baratos para el sostenimiento del sector industrial. Este, por su parte, creció fundamentalmente en base al subsector de bienes de consumo duradero. El crecimiento desarticulado del sector industrial, y el estancamiento del sector agropecuario, así como la estrechez del mercado interno, producto de políticas salariales restrictivas, y de las normas generales del modelo de desarrollo adoptado, es decir de un desarrollo con contradicciones, marcaron dificultades al proceso de acumulación.

Un segundo elemento, fue la crisis del gobierno, sobre todo frente a los sectores medios de la sociedad después de los acontecimientos de 1968 y la necesidad de superarla.

El tercero, ya entrada la década de los setenta, fue la crisis generalizada del capitalismo, y la repercusión que tuvo en la economía mexicana, modificando algunos planteamientos iniciales dentro de la política económica.

De acuerdo a lo anterior, había que plantear un modelo de acumulación para que la economía pudiera seguir creciendo. En este sentido, la política económica de Luis Echeverría, se propuso reactivar el sector industrial poniendo el acento en los subsectores de bienes de capital y consumo final, y reactivar el mercado interno.

Sin embargo, la economía nacional al finalizar el sexenio vivió un profundo estancamiento; a los efectos de la crisis generalizada del capitalismo,² se sumaron los males congénitos del aparato productivo, heredados del desarrollo estabilizador. A la contracción de la inversión debido a la caída de la tasa de ganancia, se sumaron el crecimiento desarticulado del sector industrial, el agotamiento del sector agropecuario y la dependencia tecnológica, que impidieron el crecimiento de la economía y el fortalecimiento del subsector de bienes de capital.

Ante la contracción de la inversión, y la **atonía** económica, el gasto público creció de manera exorbitante. La inversión pública se orientó a llenar los huecos dejados por la contracción de la inversión privada, creando empleos con el crecimiento del sector servicios tratando de reactivar el mercado interno, así como a obras de infraestructura y beneficio social.

Junto a los límites estructurales endógenos y exógenos, para alcanzar las metas trazadas en la política económica, la mediación de las fuerzas sociales para presionar al gobierno alrededor de los procesos de apertura y diálogo del régimen, marcaron el límite político y definieron la correlación de fuerzas existente al finalizar el sexenio, signada por una dinámica conflictiva.

Los conflictos se manifestaron entre distintos sectores sociales, y entre éstos y el propio gobierno. Así por ejemplo, el proyecto modernizador y democratizador en las organizaciones del movimiento obrero, que contempló la renovación de las burocracias sindicales tradicionales, fue motivo de un enfrentamiento entre éstas y el gobierno.

La apertura democrática, planeada en una coyuntura específica buscando recuperar consenso, topó con toda la organización burocratizada del movimiento obrero, y con condiciones económicas desfavorables, terreno en el que se cuestionó profundamente la política económica estatal sobre todo por parte de la burguesía.

El proceso de apertura se fue cerrando cuando el gobierno tuvo que cerrar filas con las burocracias sindicales tradicionales, restando espacio primero, y desarticulando después, al sindicalismo independiente.

Así la burocracia sindical tradicional, al oponerse al proceso, marcó el límite a la democratización de sus propias organizaciones y cerró el camino a la insurgencia obrera al conservar el monopolio en el terreno de las negociaciones económicas y en los espacios políticos.

Es así que en coyunturas específicas, como los aumentos salariales de emergencia en 1973 y 1974, el Congreso del

Trabajo encabezó las demandas, mostrando quien dominaba el espacio a conseguir la revisión anual de los contratos colectivos,³ y al enfrentar paralelamente a la burguesía.

El proceso político de apertura y algunas medidas económicas del régimen, encontraron su límite en la oposición de la burguesía. Cuando sus intereses se vieron afectados por medidas a corto plazo, coyunturales, las respuestas políticas y económicas de la burguesía no hicieron esperar.

Ante la presión burguesa por ejemplo, los aumentos salariales de emergencia demandados por el Congreso del Trabajo de un 35% en 1974, se negociaron hasta llegar al 22%. Las huelgas generales no estallaron y se dejó a la libre negociación con cada empresa según las condiciones económicas de éstas; lo que exigía la burguesía eran medidas a corto y mediano plazo para seguir asegurando sus ganancias.

A pesar de ello, la **mano blanda** del régimen ante el sindicalismo independiente, el apoyo al Congreso del Trabajo en las demandas de aumentos salariales de emergencia —aunque fueron negociados— el reparto de tierras en el valle del Yaqui en 1975, el plan inflacionario culminaron en la **crisis de confianza** y en la creación del Consejo Coordinador Empresarial.

Este órgano cúpula de la burguesía, armó un proyecto propio de sociedad cuyo eje giró sobre sus propuestas para superar la crisis, y también, sobre la crítica a la política económica instrumentada por el gobierno. Devolver a la iniciativa privada su lugar histórico dentro del aparato económico y del cual había sido desplazado por el Estado, fue la propuesta central del proyecto empresarial.⁴

Los conflictos alrededor de la definición de estos procesos, configuraron la sociedad heredada por Luis Echeverría: estancamiento económico, devaluación del peso, crecimiento desmedido de la deuda externa, proceso inflacionario creciente, desempleo. Marcados los límites del proceso democratizador y atomizado el sindicalismo independiente, la burocracia sindical fortalecida siguió siendo el apoyo y sostén principal del gobierno. Por su parte la burguesía cuestionó la figura presidencial.⁵

Los procesos políticos y económicos desarrollados a lo largo del sexenio, pueden darnos la pauta de como se entretejieron estos procesos en la forma

3.- Hasta entonces, la revisión se hacía cada dos años.

4.- Carlos Tello y Rolando Cordera, *op. cit.*

5.- Cfr. Carlos Tello, *La política económica en México, 1970-1976*. Méx., S. XXI, 1977.

capitalista de dominación, y sobre todo la anteposición de las necesidades del sistema a los pactos y proyectos políticos.

La crisis económica no sólo deterioró las posibilidades de restaurar la economía en un nuevo modelo de acumulación a largo plazo, sino que evidenció la dificultad para reproducir la forma política en el ejercicio de la dominación para el conjunto de la sociedad.

II

Al asumir la presidencia el Lic. José López Portillo, tres elementos definieron su política económica y su proyecto político.

El primero consistió en recuperar la confianza de la burguesía, borrar cualquier rasgo de populismo para armar una política económica que permitiera superar la crisis y lograra el crecimiento económico, sin que esto representara hacerle sentir a la clase obrera el abandono de sus demandas.

El segundo elemento, radicó en las posibilidades que abría, la exportación del petróleo para la economía resquebrajada, que a la luz de los yacimientos descubiertos y con la coyuntura internacional de precios, aparecía como el pilar para la reactivación económica.

Finalmente, la reforma política.

La política económica de José López Portillo, en sus propias palabras contempló tres periodos: dos años de austeridad, dos de estabilidad y dos de crecimiento.

De acuerdo a lo pactado con el FMI en 1976, la política económica se planteó y se ejerció con medidas económicas restrictivas para el conjunto de los asalariados. Estas medidas, para el conjunto de la sociedad, se argumentaron en base a la situación económica heredada del sexenio anterior y por la necesidad imperiosa de lograr la estabilidad y superar la crisis.

Los acuerdos con el FMI, la explotación del petróleo y la política salarial restrictiva fueron la piedra angular de la política económica del sexenio.

Las divisas generadas por la venta del petróleo brindan la posibilidad de reactivar el aparato productivo, con una pauta de acumulación centrada en la producción de bienes de capital y consumo nacional.

Sin embargo, en el transcurso del sexenio, el desarrollo de estas medidas no culminaron en las metas trazadas al inicio. La política económica siguió sin poder echar a andar un modelo de acumulación y desarrollo a largo plazo. La agudización de la crisis, de recesión internacional, la presión burguesa por conservar sus ganancias con medidas favorables a su acumulación a corto plazo, y la petrolización de la economía, cambiaron lo que en un principio se planteó.

Después de la recesión de los últimos meses de 1976 y de 1977, las tasas de crecimiento del PIB, manifestaron crecimientos considerables. 1978 y 1979, ⁶ fueron los años de la **recuperación**. Efectivamente aumentaron la inversión pública y privada. Las utilidades de las empresas se incrementaron, ⁷ pero la política salarial restrictiva permaneció, lo mismo que las altas tasas de inflación. El salario como fondo de acumulación y los subsidios a la burguesía fueron procesos ininterrumpidos desde el modelo económico anterior. A partir de 1978, por ejemplo, se instrumentó la política de liberación de precios que deterioró aún más el salario obrero.

Si bien se observó esta leve recuperación, en los años siguientes la reducción del mercado interno se agudizó al no corresponder los aumentos salariales con las tasas de inflación.

La petrolización de la economía se opuso a la canalización de las divisas para la integración de una planta industrial productora de bienes de capital y para reactivar el subsector de bienes de consumo final; lo que trajo consigo nuevos desajustes a la economía. Las exportaciones de petróleo, pasaron a significar más del 70% del total de éstas. Las divisas generadas y gran parte del gasto público se orientaron a desarrollar la rama de hidrocarburos, descuidando otros renglones; la producción de manufacturas decayó sensiblemente.

Buscando exportar cada día más, la política petrolera se planteó a largo plazo en base a algo que estaba determinado coyunturalmente: el precio internacional de los hidrocarburos. Al revertirse la coyuntura internacional y alterarse los precios, quedó a la luz que la solución vía el petróleo, no era precisamente una panacea.

En los últimos años del sexenio, se agudizó la política económica restrictiva, sobre todo en el último, en que el

6.- Para 1977, el PIB decayó al 3.2%. Durante 1978 y 1979 fue de 7.1 y 8.1% respectivamente. Ver: Carlos Tello, "Las utilidades, los precios y los salarios: los años recientes", en: *Desarrollo y crisis de la economía mexicana*. Mex. FCE, 1981. Serie Lecturas No. 39.

7.- *Ibid.*

declive económico volvió a hacerse presente con el anuncio de un nuevo recorte presupuestal, y como política para contrarrestar la inflación la reducción del crecimiento del PIB.

La política económica diseñada para superar la crisis y recuperar las tasas de crecimiento del PIB sostenidas en el modelo de desarrollo anterior, se convirtió en una serie de medidas favorables a la gran burguesía.

En los años de mayor recesión, de quiebra de medianas y pequeñas empresas, de altísimas tasas de inflación y desempleo, los grandes grupos oligopólicos vieron crecer sus ganancias.⁸ Todo ello sostenido, como ya mencionamos, por una política salarial restrictiva, la liberación de precios y por políticas fiscales que no afectaban las ganancias de los grandes grupos oligopólicos. Prueba de lo anterior fue la fortaleza de la burguesía financiera al convertirse la banca en banca múltiple, cerrando el circuito capital industrial-capital bancario, asegurando así el control de inmensos capitales bajo formas monopólicas.

Las condiciones de recesión, de no inversión hacia el capital productivo, hicieron a la especulación y a las altas tasas de interés fuente de enormes montos de acumulación, facilitando con ello la fuga de capitales ante la debilidad del peso.

Ante una situación que evidenciaba la imposibilidad de superar la crisis económica, en una correlación de fuerzas favorable a la burguesía que seguía acumulando, el régimen de López Portillo armó el soporte político de su gestión: la reforma política, que por su parte, fue el resultado y culminación de la apertura democrática gestada en el sexenio de Luis Echeverría; ésta se dio sin embargo, en un contexto y con un contenido diferente.

La amplitud del proceso de apertura dibujado en el inicio del sexenio echeverrista, y cuyos límites se definieron en torno a los conflictos de las fuerzas sociales, fue el escenario de gestación de la reforma política.

Si en el sexenio anterior se buscó la apertura y el diálogo con sectores medios y la democratización, o mejor, la renovación de las burocracias obreras tradicionales, la reforma se inscribió en el límite que esos procesos tuvieron en su desarrollo. Se legaliza en la contienda electoral la participación de partidos políticos tanto de izquierda como de derecha, cuando los pactos políticos con las fuerzas sociales fundamentales, estaban ya definidos; la burguesía había presionado por medidas económicas favorables a su acumulación inmediata, la Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo, a pesar de criticar las medidas para superar la crisis y la política de austeridad —a todas luces fa-

vorables para allanar el camino a la acumulación de capital— fueron el soporte de la política salarial y laboral del régimen. Cuando el sindicalismo independiente atomizado, no alcanzaba logros similares en la negociación a los obtenidos por las burocracias sindicales de la CTM y el CT, y ante la evidencia de que el petróleo, no fue el **oro negro** que pudiera sacar al país de la crisis a mostrar la economía síntomas de volver a caer en el estancamiento.

En el último año del sexenio la situación económica era una clara evidencia no sólo de la crisis general y particular, sino también de una política económica zigzagueante. Esta política económica fue acompañada de una serie de argumentos políticos en un proceso de deterioro que generaron de nueva cuenta un clima de desconfianza generalizada, que sólo encontraría en las elecciones y luego en el último informe presidencial un espacio de expectativas de que algo bueno sucediera y de que alguna esperanza política y económica fuera aun factible.

Cada decisión en materia de política económica era enmarcada con un discurso justificador que en la mayoría de los casos sólo tenía vigencia inmediata y momentánea —política—, y que incluso en ocasiones necesitaba de un giro drástico para tratar de evitar una evidente contradicción.

Así, si el peso se encontraba más firme que nunca, en poco tiempo el peso necesitaba encontrar su nuevo valor y era devaluado, o puesto a flotar. Si se decidía no incrementar la producción petrolera ni bajar los precios, en poco tiempo sucedía lo contrario. Si la situación de los trabajadores se encontraba económicamente muy deteriorada, al poco tiempo aumentaban los precios de los productos básicos.

En general si analizamos los discursos del gabinete, encontraríamos evidencias claras de contradicciones que mostraban una posición incierta. Petróleo, precios, SAM, finanzas, etc., fueron puntos de la economía sujetos a vaivenes constantes.

El ejecutivo buscó en la realidad un argumento que le permitiera justificar los vaivenes, y así lo expresó al decir que no era materia de contradicción política las medidas cambiantes, sino de la necesidad de adecuar la política económica a las circunstancias. Sin embargo, detrás de ese argumento es factible encontrar el deterioro de las formas políticas que permitieron en momentos anteriores encubrir tanto la política zigzagueante, como la imposibilidad de encontrar una salida más o menos satisfactoria a las condiciones que imponía la crisis.

Una cosa era realmente evidente, la crisis golpeaba a las clases trabajadoras e incluso a la llamada clase media de una manera cada vez mayor, por otro lado la burguesía

lo cesaba en acumular y favorecerse en esta situación. El sector comercial imponía sus condiciones en materia de precios, el sector industrial no renovaba sus inversiones y mucho menos sacrificaba su ganancia, y el sector financiero imponía sus intereses ante una débil política en materia financiera y fiscal. Los bancos pesaban demasiado en relación al Banco de México.

Con lo anterior no queremos decir que la burguesía se encontraba sectorizada; así se expresaba en los diferentes sectores. Las particularidades de operación de la burguesía hacen difícil si no imposible generalizar los ámbitos oligopólicos en los que se ubica, sin embargo tampoco podemos afirmar que así sea el conjunto de la burguesía; el desarrollo desigual opera también en esa clase social.

Económicamente la correlación de fuerzas se inclinó a favor de la burguesía, políticamente aparecía una contradicción a mediano y largo plazo: no aparecía una salida a la crisis económica y no aparecía una salida a la cada vez mayor crisis de confianza. El sistema se acercaba a un límite en donde se iniciaba un estrangulamiento general, económico, político, e ideológico.

Si siquiera la elección presidencial, muy a pesar de sus contundentes resultados, se convirtió en aglutinador de las fuerzas sociales fundamentales, en torno a las posibilidades de instrumentar un nuevo pacto social para enfrentar a la crisis.

La elección de un candidato que no era el bueno para la clase política ni para los trabajadores, condujo a un repliegue de las bases sociales soportes de los proyectos estatales. Las fuerzas sociales fundamentales de la sociedad, daban muestras claras en sus actuaciones de este repliegue, hasta la burocracia sindical oficial, soporte histórico del gobierno, condicionó su apoyo a Miguel de Madrid, y ante la presión de las bases que conglomeraron lanzó por aumentos salariales de emergencia con amenazas de huelga general, cuestionando las medidas anticrisis, a costa del deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

La burguesía por su parte, a pesar de haber incrementado sus ganancias, no se tiente el corazón y efectúa otra fuga de capitales no sólo ante la inminente devaluación sino ante el incierto futuro de la política económica.

El cuestionamiento y la crítica a la política económica del régimen, se recrudecieron en los últimos meses del sexenio, después de las elecciones, cuando la política restrictiva recetada para combatir la inflación, ni por como daba los resultados esperados. El aumento a productos básicos como pan, tortillas, leche, gasolina, luz y gas doméstico al quitárseles los subsidios, hicieron que el mes de agosto, sólo en ese mes, la inflación fuera

del 11%. La segunda devaluación,⁹ también en el mes de agosto y la deuda externa superior a los ochenta mil millones de dólares, fueron los elementos que hicieron que la crítica y el cuestionamiento al régimen se sintieran desde todos los poros de la sociedad.

La economía a punto del descalabro total frente a los acreedores extranjeros y la recesión, encontraron sus explicaciones en todos los niveles sociales.

Para la burguesía, el Estado era el culpable del desastre; la política económica equivocada, la mala administración del petróleo, la corrupción de los funcionarios públicos, las malas condiciones del país para invertir, justificaban la fuga de capitales y la especulación a todos los niveles.

Las organizaciones del movimiento obrero oficial, cuestionaron las políticas anticrisis a costa de los salarios que permitiendo enormes beneficios a los grupos monopolísticos, no se reinvertían productivamente.

La izquierda parlamentaria, el PSUM, daba también su propia interpretación de la crisis. Apoyaba medidas de mayor participación estatal para combatir la inflación y la especulación. Hacía eco con el movimiento obrero oficial en demanda de mayor salario y de escala móvil. Planteaban una política de mayor encaje legal y otras reformas en materia hacendaria.

Para el ciudadano común, la desconfianza en el régimen se volcó en compras de pánico, en rumores de golpes de estado, de atentados a miembros del grupo gobernante, en convertir sus cuentas de ahorro a dólares, o en guardar los billetes verdes bajo el colchón. Se hablaba de la **argentinización** de la economía mexicana.

El VI informe de gobierno, tenía que enfrentar a todos estos interlocutores. Tratar de dar una respuesta. Explicar la cancelación de los subsidios a los productos básicos, explicar la inflación creciente, explicar el desarrollo de una política económica que paso a paso fue encontrando la imposibilidad de superar la recesión, de contener la inflación y el desempleo, el quiebre de la balanza comercial al derrumbarse la exportación petrolera, las dos devaluaciones del peso. Pero sobre todo, el punto más delicado giraba alrededor del pago de la deuda y de las condiciones en que necesariamente habría que renegociar el pago.

El gobierno tenía que encontrar una salida política. La reproducción del sistema, en el contexto de crisis y austeridad, tenía que buscar una forma política. Tenían que apretarse los apoyos de las organizaciones institucionales que incluyen a los dominados.

9.- Que se hizo en un parcial y efímero control de cambios en el que incluso se cerró el mercado de dólares. Esta situación vio nacer en este país el famoso "mercado negro".

Económicamente no había ni la ilusión petrolera, ni esperanzas de recuperación que ofrecer. En el contexto de recesión y crisis, a lo largo del sexenio, no se había articulado la forma política ni el consenso alrededor del gobierno; para el bloque de los dominados, la coerción seguía siendo el elemento para instrumentar las políticas económicas anticíclicas. La burguesía ofreció apoyos coyunturales mientras la continuidad de las políticas favorables a su acumulación y a su ejercicio especulativo no se rompieran o interrumpieran. Para el conjunto de los dominados, a pesar de las protestas y **condiciones** puestas por las burocracias sindicales, el ejercicio de la política económica, evidenciaba con cruda rudeza el divorcio cada vez mayor entre ésta y sus intereses de clase inmediatos.

Este fue el contexto general de crisis en el que llegó al sexto informe de gobierno el Presidente José López Portillo.

Precisamente en este informe, surge un argumento contundente para enfrentar la responsabilidad histórica del ejecutivo: el Presidente López Portillo anuncia la nacionalización de la banca y el control generalizado de cambios. Sin embargo de nueva cuenta se hace evidente la necesidad de argumentar políticamente una medida económica apresurada y sin una estructuración previa, y mucho menos producto de una conflictiva interclasista. Si bien es cierto que la medida era necesaria y pudiera ser buena, también lo es el hecho de que contradice todas las decisiones asumidas con anterioridad, en el sentido de lo negativo que pudiera significar por ejemplo **el control de cambios**. Al menos así lo expresó el documento elaborado por el Banco de México, fechado el 20 de abril de 1982, en donde después de un amplio análisis, se llega a la conclusión de que esa medida no sólo no es adecuada a nuestra realidad sino adversa.

La significación de esas dos medidas que han sido ampliamente discutidas y analizadas en diversos foros académicos, políticos y periodísticos, sobre las cuales existe una amplia literatura, tiene una primera y significativa repercusión sobre los procesos de recuperación del prestigio del régimen; se ha encontrado a un sector que prácticamente es culpable de gran parte del fracaso de la política económica: el sector financiero.

Este sector se ha convertido en el pagano de gran parte de los fracasos tanto por su actuación al favorecer la especulación, como por sus actitudes antinacionales. Alrededor de esto se ha tejido un discurso reforzador del Estado cuyos elementos coaccionantes (si no regresan las divisas . . . **el ejecutivo cuenta con listas de personas que han invertido en el extranjero** . . .) no tienen muchas expectativas, ya que parece que nadie deja de estar involucrado en ello. Precisamente esta dificultad que representa castigar a los malos mexicanos puede revertir

gran parte de la dinámica que pretende devolver credibilidad al propio gobierno.

Si anteriormente la política del régimen aparecía comodevaluada, la apariencia actual tiende más a la sobrevaluación, es decir aún no encuentra su ubicación y sus alternativas reales ante la crisis y ante la dinámica social.

En términos de la política, parece que se tienen las medidas y argumentos primarios para enfrentar la crisis, pero en términos de la realidad, aquellas son rebasadas ampliamente por la propia situación. No obstante ha repercutido en las organizaciones políticas generales (¿y menos en las que tienen una presencia institucional) de tal manera que ellas mismas —las medidas— se han tomado en el eje central de la discusión. Alrededor de ella se genera un espacio secundario de discusión que inminentemente es el que aborda las cuestiones reales e inmediatas: ¿qué sucederá con los acuerdos del FMI y qué modalidades impondrá a nuestra economía? ¿Cuáles serán las posibilidades de negociación salarial de los trabajadores? ¿Cómo se resolverán las complicadas negociaciones en torno a la nacionalización de la banca e materia de acciones, y en las demás medidas que ello implique? ¿Qué le espera a las ciudades fronterizas? ¿Cómo vamos a salir de la crisis? ¿En cuánto tiempo y qué costo?

La relación entre las medidas mencionadas, el contexto general, la manera en que fueron hechas, y los resultados inmediatos les dan un matiz político, y por ello las variaciones inmediatas de la situación económica general no pueden ser profundas en términos de una salida satisfactoria para el conjunto de la sociedad.

La política seguirá construyéndose en torno a la preservación del sistema, sobre todo en términos de lo que el país necesita, y no en términos de las necesidades de la clase trabajadora; otra vez se pide **un nuevo sacrificio de los dominados**.

Insistimos que más que reforma o medida pensada en términos de economía, la nacionalización de la banca e el control de cambios, sirvieron como tranquilizante político, aunque evidentemente tengan un trasfondo económico. No es aventurado afirmar que ni los más crédulos del gobierno, ni los más luchadores por reformas del sistema, ni los analistas de la política y la economía, pensaron en la adopción de estas medidas ¿y menos una semana antes del VI informe.

A un mes de distancia del informe y a menos de dos días de cambio de gabinete, el rigor de la crisis, dos devaluaciones, una deuda externa de más de ochenta mil millones de dólares, desempleo, estrechamiento del mercado interno, altas tasas de inflación, una reforma política viciada y una incertidumbre ante el futuro, so

el marco en el que el Presidente electo empiece a plantear las condiciones de su próxima gestión.

III

A partir de los elementos que han sido reseñados de una manera breve, y de los primeros indicios a raíz de la entrevista del Presidente electo con Ronald Reagan, podemos afirmar que los hilos de la política y de la economía se tejerán para el sexenio 1982-88 con un objetivo preciso: el de garantizar la acumulación ante una condición también precisa que es la de administrar la crisis económica.

Revisando por encima los planteamientos esgrimidos tanto en la administración del licenciado Luis Echeverría como en la del presidente López Portillo, encontraremos que en sus discursos políticos y acciones económicas siempre fueron rebasados por los problemas y las situaciones reales, las contradicciones del sistema **pesan demasiado** para las clases sociales fundamentales, como para pretender encontrar soluciones definitivas a ellas.

Esta realidad histórica también se hará presente para el Presidente electo y que para estas fechas ya habrá dado evidencias de la relación entre lo dicho y lo hecho. El argumento de campaña **por una sociedad igualitaria** se basa en un contexto económico inmediato, y el otro **por renovación moral**, se refiere a los problemas del poder. Ambos enfrentarán sobre todo en momentos de crisis, contradicciones que los hacen poco confiables a menos que se entienda por ello **un poco más de ingreso y un poco menos de corrupción**.

Estas declaraciones fueron hechas en medio de una serie de situaciones que no les dan amplia credibilidad —los efectos de la nacionalización y del control de cambios son también precedentes—, y sobre todo en momentos en los que la economía capitalista requiere de medidas que conducirán al país a una situación más igualitaria —en la pobreza— de los trabajadores, y que afectará a sectores medios de manera creciente.

Al mismo tiempo, se sitúa en una posición difícil en cuanto a las expectativas generadas por las ideas generales del proyecto nacionalista de desarrollo, y por ende en la redefinición del pacto social. Es evidente que no hay una tendencia a continuar con las reformas propuestas y el proyecto nacionalista, es más, dentro del ámbito del poder, y especialmente dentro de la burguesía, Carlos Tello —actual director del Banco de México— es señalado como **comunista**, y para nadie es un secreto que ha sido importante impulsor del proyecto mencionado.

Por otra parte la reforma política posiblemente entre en una etapa de calma o al menos de lentos procesos, ya que

llama a la verdadera participación democrática, está por el momento lejos de ser una realidad. Paralelamente la izquierda parlamentaria necesitará de planteamientos renovados para no limitar su acción entre políticos, sin alcanzar una base más o menos amplia.

No obstante las condiciones generales de la correlación de fuerzas, ampliamente desfavorable para las clases dominadas —sobre todo por la atomización de las luchas obreras y campesinas, y por las características de los liderazgos obreros oficialistas—, los rasgos de la dominación aun conservarán esa aparente ambigüedad en el discurso político, en tanto las bases del **nuevo pacto social** aún no encuentran una definición clara.

El nuevo modelo de desarrollo no puede ser nacionalista en tanto la articulación con la economía internacional, especialmente con el FMI, dista mucho de poder romper con los lazos de dependencia. Pero tampoco podrá ser neoliberal en tanto ese modelo económico se encuentra en entredicho operativo para los países en vías de desarrollo, y su contenido político encontraría fuerte oposición aun dentro de las organizaciones obreras oficiales.

Por otro lado el contexto internacional capitalista necesitaba de nuevas alternativas para no ahorcar a los países endeudados, lo que no se refiere a cambios sustantivos para países como el nuestro, al menos abre la expectativa de negociaciones menos desfavorables.

Mientras tanto en nuestro país el discurso político varía en el tono y hasta en ciertos matices, pero no en cuanto a su sustancia.

Las primeras declaraciones del ahora Presidente electo, se oponen al estilo político del actual discurso del ejecutivo en donde destaca la **mea culpa** situada en los problemas originados en las desviaciones y errores de una parte o del conjunto de la sociedad y a un contexto internacional incontrolable. El discurso del licenciado de la Madrid señala con **índice de fuego** errores que deban ser asumidos específicamente por alguien, incluso en el terreno de la corrupción censura a personajes políticos. Sin embargo las expectativas que genera este estilo parecen tener límites económicos y políticos, que en un momento determinado las reducirían a reformas necesarias para el sistema, pero no para las clases dominadas, tal y como lo señaló ante Reagan.

Es posible afirmar el doble carácter del discurso: en el sentido de las necesidades objetivas del sistema y las expectativas de solución a problemas sociales. En este segundo sentido es donde se puede ubicar el papel del discurso en la reproducción de las formas políticas e ideológicas de dominación.

En el amplio espectro económico es innegable que el sistema actual genera una cada vez mayor concentración del ingreso, como condición actual de la acumulación. Si a esto le agregamos que la crisis de sobreproducción ha golpeado en especial a los países no desarrollados, sobre todo en términos de la parte proporcional que les corresponde **cargar** en el sistema internacional, es bastante difícil pensar en la posibilidad de igualdad social e incluso una mejoría económica de las clases trabajadoras en el corto plazo. De nueva cuenta uno de los factores que contrarresten temporalmente la crisis, y que se presenta como inevitable a estas alturas, la contracción del gasto público y su correspondiente desempleo, opone los buenos deseos a la cruda realidad.

Hasta donde puede entenderse, los acontecimientos y las condiciones en la producción (reducción en la tasa de crecimiento del empleo y control salarial), circulación (alza de precios e inflación) y consumo de mercancías (limitado para las clases trabajadoras), no tendrán un viraje sustancial en los próximos dos o tres años.

Ya vivimos una situación en que las expectativas eran las de dos años de austeridad, dos de estabilidad y dos de crecimiento, y las realidades fueron otras, marcadas con inflación y sobre todo, de seis años de austeridad para la mayoría de los mexicanos. También vimos que el recurso petrolero no puede por sí mismo soportar al conjunto de la economía, y que ésta no puede ser **saneada** en el corto plazo.

Ante esta situación cabe preguntarse si la mayor participación estatal en los sectores productivos contribuiría a solucionar parcialmente estos problemas, **enderezando** algunas ramas de la producción como la agropecuaria en lo que a granos básicos se refiere, o la industrial en sus múltiples aspectos.

También cabe preguntarse si en la circulación de las mercancías la intervención estatal podría contribuir a solucionar parte del problema.

Estas preguntas tienen necesariamente más de dos respuestas y más de dos sentidos; estas últimas tendrán el enfoque clasista en donde uno de los extremos opondrá toda su fuerza para que no sean afectados sus intereses, o al menos negociar para **cambiar de giro** favorablemente. La contraparte ha encontrado en la intervención estatal una alternativa para el reparto justo de la riqueza social, pero sin una contundente evidencia que pueda reforzar esta alternativa.

La capacidad de fuerza de la burguesía se ha hecho patente y ha contado con el reconocimiento público y estatal en más de una ocasión en los últimos años. La fuga de capitales razonadamente temerosos de las devaluaciones, y la llamada a que regresen y se inviertan en el

país, que siempre ofrece garantías, muestra que no bastan los buenos deseos de intervención estatal y de nueva cuenta esta fuerza social fundamental es una parte activa, sumamente activa, para las definiciones de la política económica del país.

Por otro lado la intervención estatal, recargada más en aspectos de servicios que en aspectos productivos, ha mostrado que las estadísticas velan el contenido cualitativo de servicios necesarios que son a los que acude el grueso de la población trabajadora, y que aun se manejan en **mínimos de bienestar**. La parte productiva está aun muy lejos de poder integrar a su economía, ya no a los trabajadores de las empresas privadas, sino siquiera a los desempleados.

No obstante todo lo que está **torcido** en la sociedad pudiera ser relativamente **enderezado** por una favorable intervención estatal, aun quedaría por resolverse un problema: un Estado de un país capitalista que pudiera hacer que la contradicción fundamental dejara de tener efectos reales. Hacer a un lado a la burguesía productiva no es la tarea ni del gobierno ni del partido en el poder hablar de un reparto justo de la riqueza sería necesariamente desde el punto de vista de los que gobiernan no de los gobernados, puesto que sólo eliminando la contradicción fundamental se llegaría a tal reparto y esto implica otro régimen o sistema de producción.

Estas y otras cuestiones económicas concebidas más allá de la coyuntura, han sido acompañadas de lentos y a veces explosivos procesos políticos y sociales, que no son otra cosa que las expresiones de todos y cada uno de los componentes de la sociedad. Concebirlas más allá de la coyuntura implica salir de ese mundo de ideas y representaciones de los procesos que se viven ahora mismo como es el caso de las actuales elecciones y de la nacionalización. Es en ese sentido que para pensar en proceso de corto plazo no basta con reflexionar sobre los acontecimientos inmediatos, sino también sobre los períodos más largos.

Económicamente lo que quedará para los analistas de futuro será el agotamiento de un modelo de acumulación y el inicio de otro, o tal vez el cierre de un ciclo que inicia el siguiente. Políticamente, se considerarán cuestiones tales como la significación o el alcance de la reforma política y sus particularidades en época de crisis económica, desde luego la nacionalización y sus alcances desencantados, el afianzamiento del Partido Acción Nacional como la segunda fuerza electoral y los avances importantes de la izquierda en ese mismo proceso.

Incluso se podrá analizar el desplazamiento en el plan de las noticias de sucesos tan lamentables para la clase obrera como la represión a los trabajadores refrescos, metalmeccánicos u otros; por los comentarios



A.S. Gutiérrez

alrededor de las elecciones a veces como si fueran armados a partir de guiones ya establecidos en otras elecciones: el arrollador triunfo del candidato del partido oficial, los fraudes o no fraudes en el proceso, los reconocimientos de fuerzas opuestas a triunfos o fracasos, las cifras sin precedentes, etcétera.

Por otra parte, analizando los proyectos que insistentemente se han hecho públicos (nacionalista y neoliberal) queda en el centro de la atención el elemento que acompañará las medidas económicas para plazos de dos a tres años o tal vez más, y es el que se refiere a la manera o forma en que desde arriba ha de ser implementado el pacto oficial, o de reconstrucción de una nueva forma de dominación en nuestra sociedad.

Recurrir a este planteamiento tiene como objetivo tratar de encontrar o reafirmar algunas tesis que han de ser propuestas como alternativa a todo lo que suene oficial a este movimiento obrero, campesino o partido.

Lo es difícil pensar que todas las instituciones oficiales han sido los elementos básicos para reproducir una y

otra vez la dominación política. En el caso del movimiento obrero, pilar político e ideológico del sistema, históricamente está demostrado que mientras no rebase los marcos institucionales será sujeto del juego político, en caso contrario, ha sido y será sujeto de coerción. Caso similar es el movimiento campesino, no así el llamado sector popular, el cual por sus rasgos constitutivos aglutina a la clase más informe y con más expectativas burguesas.

El partido oficial, punto de síntesis de todas las instituciones y organizaciones oficiales, ha dado evidencias de las posibilidades de transformación de la sociedad que se ha propuesto, y ellas nos tienen metidos en esto y en lo que viene para los próximos seis años.

Todo lo anterior nos lleva a pensar que si gran parte del Estado está siendo ocupado por ellos, ¿cómo pedir una mayor intervención del Estado en todo? Con ello queremos dar a entender que si el proyecto nacionalista tiene como uno de sus principales argumentos la intervención estatal, no estamos de acuerdo con él, ya que las transformaciones que necesita son algo más que reformas y participación relativa de las clases dominadas. Del otro proyecto está por demás hablar, encarna una derechización y una asociación no apta como alternativa para las clases dominadas.

De nueva cuenta habremos de insistir en que el nacionalismo no sólo significa independencia de lo externo, nacionalismo también nos remite a un carácter de nación, que en el caso conlleva una visión clasista de ella, y pensar en un **nacionalismo cardenista** ahora resulta totalmente fuera de contexto.

La nación para la burguesía es y será necesariamente diferente a la que aspiran las clases trabajadoras, y ello significa o la continuación del dominio capitalista o la transformación profunda de la sociedad.¹⁰

Por otra parte, recurriendo a los planteamientos del Presidente electo, pensamos que en su punto de partida las tareas no sólo son un reto difícil por la situación actual, sino también porque entrañan una serie de reformas que en lo económico se sitúan en medio de los intereses de las clases sociales y en lo político, además de tratar de limar los vértices de esa oposición, deberán enfrentarse a vicios que se han generado en el poder y se han convertido en características inherentes.

Así la prepotencia de los políticos ante las arcas abiertas, y principalmente el distanciamiento con los ciudadanos, sólo parecen validar la política revestida de poder con impunidad. Tal parece que una es la política que se hace en declaraciones y otra la que resienten los ciuda-

10.- Angélica Cuéllar y Antonio Rivera "El nuevo" proyecto nacional: ¿una alternativa de cambio?" en *Revista Casa del Tiempo*, Vol. II, No. 23, Julio-Agosto 1981 UAM. Méx



A.S. Gutiérrez

danos comunes; en cierto sentido eso es lo que marca la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Sin embargo no se puede dudar que esa aparente ambigüedad en la política ha tenido efectos positivos para el sistema, y en ello podría estribar uno de los rasgos del pacto sociopolítico para el sexenio 1982-1988. Todos los retos encontrarán un discurso resolutivo que se podrá engrandecer en cuanto la mejoría económica asome, y todos los fracasos se convertirán en tropiezos que dejen enseñanza para no ser repetidos.

Podríamos pensar en que la separación entre los políticos y sus representados en la acción real de defensa de intereses, es suplida por un discurso sumamente abstracto, no menos confuso y a veces contradictorio; cuyo objetivo no es mostrar soluciones políticas a problemas políticos y económicos, sino mantener una serie de expectativas de cambio sin alterar soluciones o medidas necesarias para la reproducción del sistema.

Dentro del mismo discurso siempre aparecerá la posibilidad de salir adelante de nuestros problemas, gracias entre otras cosas al enorme potencial de recursos naturales.

Sin embargo la esencia de la dominación es difícil ubicarla totalmente en estos niveles discursivos, si bien son parte de ella, sus rasgos profundos están en la articulación de las organizaciones y de las instituciones en la vida cotidiana.

Cómo interpretar las acciones de la CTM y su inteligente y vitalicio líder, si en un primer momento de la sucesión presidencial, pareció haber hecho evidente una cierta conformidad con la designación del candidato y manifestar que desde luego apoyarán a de la Madrid . . . siempre y cuando se comprometa a respetar los derechos etc., y asimismo no hacerse manifiestamente presente en el arranque de campaña; para después de ciertos ajustes retomar el papel de vanguardia política e apoyo al mismo candidato.

Cómo interpretar algunos aspectos de la reforma política, si ésta parece estar limitada a ciertos terrenos obstaculizando el registro a organizaciones como el Partido Mexicano de los Trabajadores y permitiendo el registro a otros que no sobrevivirán a las votaciones por su poca vinculación o fuerza con los ciudadanos.

Cómo interpretar las campañas de conscientización para los ciudadanos, si junto a mensajes de los avances del Sistema Alimentario Mexicano, aparecen tres o más mensajes consumistas.

Los argumentos se pueden suceder uno a otro interrumpidamente en varios aspectos de la vida cotidiana y sobre todo en las interpretaciones oficiales de los acontecimientos políticos y económicos; la sociedad por su parte seguirá poniendo a prueba su resistencia y continuará evidenciando su grado de avance en la conscientización y seguirá soportando las respuestas oficiales a sus acciones hasta el límite de su resistencia.